



INFORME DEL XIII PLENO DEL COMITÉ CENTRAL

Comenzamos este informe rindiendo un homenaje al camarada Julio Anguita, quien fuera nuestro Secretario General y quizás el más destacado dirigente de la izquierda transformadora española desde el fin de la dictadura hasta nuestros días, fallecido el pasado 16 de mayo. También queremos recordar a nuestra camarada Susana López, quien ocupó innumerables responsabilidades en nuestro partido, en Izquierda Unida y en las Comisiones Obreras a lo largo de su dilatada vida al servicio de la clase trabajadora. Les agradecemos a ambos todo el trabajo realizado durante su vida al servicio de la clase trabajadora y del movimiento comunista y nos comprometemos a organizar el merecido homenaje de reconocimiento que merecen tan pronto sea posible. Que la tierra les sea leve a los camaradas. En sus nombres rendimos un sentido homenaje a todos los camaradas que han fallecido a consecuencia de esta pandemia, poniendo fin a años de lucha por los derechos de la clase trabajadora.

I.- La coyuntura internacional está marcada por las consecuencias sanitarias, sociales, económicas y culturales que está provocando la extensión del COVID por todo el Planeta.

La aceleración de la pandemia de la Covid-19, con su enorme repercusión en Estados Unidos y Brasil, amenaza con extenderse a la India y al continente africano, y las señales de alarma lanzadas por la OMS apuntan a un empeoramiento de la situación, algo que va a entorpecer los flujos comerciales y la tímida recuperación económica que se afronta en Europa, y que puede agravarse con decisiones como la apuntada por Estados Unidos de aumentar los aranceles a productos de cuatro países europeos (Alemania, Francia, España y Gran Bretaña) por el litigio Airbus, disputa que podría derivar en otra guerra comercial.

En los EEUU la revuelta contra la segregación y el racismo ha conseguido importantes movilizaciones, pero no ha podido todavía quebrar el espinazo racista del país, cuya policía sigue cometiendo asesinatos a diario y violando los más elementales derechos de la población negra. Pese a la crisis que se manifiesta en Estados Unidos por el efecto combinado de la pandemia, de la paralización de una parte de la economía y de las protestas antirracistas, el gobierno Trump sigue impulsando una temeraria política exterior que está aumentando las tensiones internacionales. El diálogo nacional con la oposición venezolana, propuesto por Maduro, que apoyan Moscú y Pekín, es

rechazado por Washington, y pese a las ocurrencias de Trump sobre hipotéticas reuniones con el presidente venezolano, Estados Unidos mantiene su acoso a Caracas, así su apoyo al gobierno golpista boliviano, mientras aumenta la presión sobre Cuba y Nicaragua.

Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones a China, y censura a medios de comunicación públicos chinos como China Central Televisión (CCTV), Diario del Pueblo y Global Times, mientras prosigue la guerra comercial. Asia tiene varios escenarios preocupantes: aumenta la tensión en Corea; tres portaaviones norteamericanos (con sus correspondientes dotaciones de aviones de combate, corbetas y fragatas) han sido enviados cerca de los mares costeros chinos, con el propósito de marcar límites a la presencia china; se ha puesto en marcha la venta de nuevo armamento estadounidense a Taiwán; y se ha reactivado la disputa por las islas Diaoyu (Senkaku, para Japón), que existe desde hace años pero que puede entorpecer la mejora de relaciones entre Pekín y Tokio que persigue Xi Jinping, aunque, al mismo tiempo, el gobierno de Abe ha cancelado de forma provisional el despliegue del escudo antimisiles norteamericano en Japón, probablemente por su elevado coste y por las dificultades económicas que enfrenta el país. Por añadidura, de nuevo surgen protestas nacionalistas y conservadoras en Hong Kong, y Washington ha aprobado la llamada Ley de Política de Derechos Humanos Uygur de 2020, acusando a China de violarlos, mientras el Departamento de Estado contemporiza con el terrorismo nacionalista en la región. Junto a ello, el filipino Duterte recomponen su alianza militar con Washington, y el enfrentamiento entre militares chinos e indios en la frontera común, con varias decenas de muertos (cuyo detonante fue la construcción de infraestructuras fuera de la línea de control entre los dos países que inició en abril el ejército indio en el valle del río Galwan), ha movilizado a la extrema derecha india, que cuenta con poderosas organizaciones con millones de miembros e impulsa manifestaciones anti chinas en las ciudades indias, mientras Modi deja hacer, con indisimulada satisfacción, y prosigue su acercamiento a Estados Unidos. Esa crisis con Delhi entra de lleno en la lógica de la construcción del bloque anti chino que persigue Trump.

Las diferencias entre Estados Unidos y Rusia no disminuyen. Aunque Washington y Moscú negocian el intercambio del espía norteamericano Paul Whelan, condenado a prisión en Rusia en 2018, por el piloto ruso Konstantín Yaroshenko -que lleva diez años en una cárcel norteamericana después de que fuera detenido en Libia en 2010 y extraditado ilegalmente a Estados Unidos, acusado de narcotráfico- y por el también ruso Víctor Bou, detenido en Tailandia por el espionaje norteamericano y trasladado a Estados Unidos acusado de terrorismo, el enfrentamiento entre Moscú y Washington sobre la expansión militar de la OTAN en el Este de Europa y en el Mar Negro, y sobre el futuro del desarme nuclear y los tratados internacionales, no presenta signos de mejoría. La cita celebrada el 22 de junio en Viena entre delegaciones de ambos países para examinar el estado del Tratado START III es un buen signo, pero Trump mantiene su rechazo a extender la vigencia del acuerdo, que expira en febrero de 2021. Estados Unidos insiste en la incorporación de Pekín a esas conversaciones, aunque China no dispone de ese tipo de armas nucleares (la tríada) y su arsenal es notablemente menor que los de Washington y Moscú: es más pequeño que el francés y similar al británico.

Sumados sus arsenales atómicos, Estados Unidos y Rusia poseen el noventa por ciento del total mundial.

Junto a esa agresividad, un inquietante signo para Estados Unidos: su deuda, la mayor del planeta, alcanzó en junio los veintiséis billones de dólares, y aumenta a un ritmo endiablado: pasó en treinta y cinco días de los 25 billones del pasado 5 de mayo a los 26 billones de junio, y dos meses después de superar los 24 billones el 7 de abril. Cuando Trump llegó a la presidencia la deuda del gobierno federal era de veinte billones: en tres años y medio ha acumulado seis billones más. Esa deuda es insostenible, y el mundo lo sabe: los Estados Unidos viven sentados sobre un barril de pólvora.

En Oriente Medio la guerra impuesta a Siria ha reducido su economía a una sexta parte del volumen de preguerra, y el desempleo y la pobreza causada por la destrucción alcanza a tres cuartas partes de la población. Al mismo tiempo, Estados Unidos sigue comerciando con el petróleo sirio, gracias a su presencia ilegal en el norte del país. La entrada en vigor de la llamada Ley de Protección civil César (por el seudónimo otorgado a un desertor militar sirio que colabora con Washington) aprobada por el Congreso estadounidense contra dirigentes sirios, es una nueva vuelta de tuerca para ahogar la economía siria, y no excluye alcanzar a ciudadanos de otros países que colaboren con Siria. En virtud de la aplicación extraterritorial por Estados Unidos de sanciones a otros países, que Rusia denunció en el Consejo de Seguridad su radical nulidad, gesto valioso que, sin embargo, no impide la ejecución de la Ley César, Trump quiere impedir la reconstrucción de Siria (torpedeando los proyectos donde participan Rusia, China, Irán, Emiratos Árabes Unidos y otros países, como Jordania), y esa ley no esconde su pretensión de derribar al gobierno de Damasco.

Es también de la máxima relevancia, la anunciada anexión por Israel, en julio, de la tercera parte de Cisjordania y de todo el valle del Jordán. Esa ilegalidad manifiesta y patente violación del derecho internacional debe ser denunciada, como ha hecho la ONU, y nos obliga a trabajar para conseguir que la Unión Europea y al gobierno de España condenen la anexión y acuerden sanciones contra Tel-Aviv en caso de llevarse a acabo. El PCE y las fuerzas progresistas y antiimperialistas debemos ponemos en marcha una campaña de denuncia de la anexión y de solidaridad con Palestina.

Si bien nos congratulamos de las recientes declaraciones del Alto Representante para la política Exterior de la UE afirmando que para la Unión Europea Marruecos no ostenta soberanía sobre el Sahara y que este es un territorio pendiente de descolonización, las noticias sobre el ofrecimiento de Marruecos a los EEUU de un enclave para instalar una base naval en Alcazarseguir, en las puertas del Estrecho de Gibraltar, son un importante elemento de preocupación. Una nueva Rota que incrementaría la presencia de tropas de los EEUU en las puertas de nuestro territorio, reforzaría el poder militar de Marruecos y haría aún más difícil la lucha por la descolonización de los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Marruecos. Reiteramos nuevamente nuestra solidaridad con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharauí, en su lucha por la libre autodeterminación del Sahara Occidental.

II.- En Europa, el Plan de reconstrucción tiene una cita decisiva el 17 de julio, cuando se reunirán en Bruselas los presidentes y primeros ministros de la Unión Europea. El proyecto de 750.000 millones de euros presentado por la Comisión es impugnado por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria, cuyos gobiernos pretenden aumentar la parte que se destine a créditos a los distintos países afectados y reducir los subsidios.

Aunque Alemania contemporiza y ha hecho algunos gestos hacia los países del sur de Europa, esos gobiernos han planteado también disminuir su propia aportación al presupuesto de la Unión, limitar la duración de las ayudas e imponer condiciones de reforma económica a los países que las reciban, algo que, en su jerga neoliberal, significa forzar a privatizaciones de empresas, reducir el peso del sector público, nuevos recortes de pensiones y empeoramiento de condiciones de trabajo.

La propuesta que debe presentar Charles Michel, presidente del Consejo, se antoja que será difícilmente satisfactoria para los países que más están acusando los efectos de la pandemia, como España. Además, la regla de la unanimidad complica sobremanera la negociación. El grupo nórdico quiere reducir la cantidad de 750.000 millones y, al margen de cuál sea el presupuesto final, el retraso en la aprobación del plan definitivo impondrá una importante demora en la recepción de créditos y subsidios, lo que dificultará de manera significativa la recuperación económica.

Si ya era inaceptable la propuesta de la Comisión -con la que España recibiría 154.000 millones, entre préstamos y transferencias-, que sepultaba el plan de dos billones de euros que aprobó el Parlamento Europeo, hay que insistir ahora en que el plan final que apruebe la Unión Europea no vaya acompañado de la exigencia de reformas antipopulares, ni suponga el predominio de ayudas a las empresas, ni fuerce a inconcretas referencias a la "modernización económica" y a "inversiones" que, en la práctica, suelen ocultar trasvase de recursos y ventajas fiscales y tributarias para grandes empresas y banca privada.

La pugna de los países del Sur de Europa por la financiación de la reconstrucción se centra por tanto en conseguir la aprobación por el Consejo de subvenciones o transferencias económicas en lugar de préstamos que deban ser devueltos y se condicionen al mantenimiento de políticas de recortes y neoliberales. El PCE debe trabajar en este contexto para intentar poner en marcha por primera vez en la UE una herramienta de política fiscal que nos aleje de las políticas monetarias, para poder mutualizar la deuda en que incurra cada país, o la Unión Europea como tal, surgida a consecuencia de la concesión de préstamos post covid.

No podemos obviar que aún estamos pagando la crisis anterior. España viene pagando anualmente unos 30 mil millones de euros solo en intereses - más de 300 mil millones de euros desde 2008. La cuestión de la deuda no puede por tanto quedar al margen del debate en las instituciones políticas de la Unión Europea.

Por ello nuestra posición es trabajar para conseguir la aprobación por el Consejo Europeo de un plan ambicioso, similar en su monto económico al sugerido por el Parlamento, y que sea destinado en su mayor parte a la protección de desempleados, al mantenimiento de salarios y puestos de trabajo, al fortalecimiento de la sanidad y la enseñanza públicas y las pensiones, y a una renovación de la estructura productiva que ponga énfasis en una economía que no destruya el medio ambiente y asegure el bienestar de la población y no los negocios privados de los grandes empresarios. En la coyuntura de la pandemia, el PCE debe trabajar para conseguir poner en marcha también en Europa movilizaciones obreras y ciudadanas que ayuden a que las instituciones europeas atiendan las necesidades populares.

Al mismo tiempo planteamos la posibilidad de aprovechar que la crisis ha puesto de manifiesto todas las contradicciones, insuficiencias y debilidades de la UE para acumular fuerzas en la defensa de un proyecto de un nuevo modelo de integración más solidario, horizontal, democrático y respetuoso con las soberanías populares. A estos objetivos dedicamos nuestra participación en el GUE, PIE y Foro Europeo.

Finalmente, mencionamos que los resultados de la segunda vuelta de las elecciones municipales en Francia muestran que donde las fuerzas de izquierda y ecologistas se han unido para poner la solidaridad social y las políticas medioambientales en el corazón de sus ciudades, han ganado. En todas estas ciudades, el Partido Comunista Francés ha sido actor de estas victorias y participará en estas nuevas mayorías, en Marsella, Lyon, Burdeos, Estrasburgo, Poitiers, Nancy.

Con estos 233 alcaldes elegidos ayer, el PCF sigue siendo una fuerza clave para la clase trabajadora en Francia. Serán puntos de apoyo para la defensa del clima con acceso a transportes públicos para todos, para el acceso a viviendas de calidad, para el control del precio de los alquileres, para el acceso a la sanidad. Estarán al servicio de la defensa del empleo, el desarrollo de los servicios públicos, y la promoción del acceso a la cultura y los deportes para todas y todos. Felicitamos a nuestros camaradas del PCF por estos resultados electorales.

III.- La crisis de Régimen ha implicado la ruptura del pacto constitucional de construcción del estado social, roto por los poderes económicos dominantes por el PP, pero también con la colaboración durante muchos años del PSOE.

Conservar las libertades y derechos conquistados exige un nuevo proceso de cambio democrático, ojalá que hasta activar el poder constituyente del pueblo como forma más eficaz de blindar derechos y libertades. En este momento nuestra presencia en el gobierno de España es un elemento determinante para mantener abierta la crisis de régimen, máxime considerando las dificultades que nos encontramos a la hora de organizar amplias movilizaciones. No dudemos que nuestra salida del gobierno en estos momentos facilitaría enormemente un pacto de estado entre las fuerzas neoliberales y conservadoras para garantizar una salida a la crisis de régimen al menos en clave reformista si no directamente conservadora.

Superada la etapa de movilización popular y cuestionamiento de las políticas dominantes que habían significado el 15M, el descenso de la capacidad de movilización social por agotamiento ha permitido el inicio de un periodo de recuperación del régimen, con una fachada más autoritaria, entregado a un discurso que justifica reducir el ya débil Estado social, es decir debilitar los derechos sociales y recortar sustancialmente las libertades.

La señal inequívoca de esta crisis en el régimen está en la autonomización de los aparatos del Estado y el surgimiento en ellos de sectores que toman la iniciativa y se preparan para un combate frontal contra los intereses populares.

La oposición que combate el gobierno de coalición no está únicamente en el Parlamento o en el poder económico, también en distintos aparatos del Estado no suficientemente democratizados a la muerte del dictador. Los grandes medios de comunicación, los poderes económicos y empresariales, los grandes grupos financieros ejercen una oposición de este tipo y usan, sin ningún tipo de precaución, a las tres derechas como instrumento de acoso y presión.

La capacidad de movilización de la izquierda social y política y los sindicatos, en un nuevo contexto internacional cada vez más agresivo contra el progreso de los pueblos, debe incrementarse para dificultar la estrategia de la oligarquía de doblegar al gobierno de coalición e intentar imponer políticas de ajuste pactadas con las instituciones europeas. Ello requiere la ruptura del gobierno y la salida de las y los ministros de Unidos Podemos, objetivo que ha sido una constante desde la conformación del gobierno de coalición y que tras el fracaso de los intentos de desestabilización durante el Estado de Alarma ahora reconvierte su estrategia con una brutal campaña de deslegitimación y desprestigio al máximo referente público de Unidas Podemos en el espacio político y en el Consejo de Ministros. Una deslegitimación planificada cuya pieza no es la persona situada en la diana sino el proyecto político que ésta representa.

Todo ello en el contexto de la pugna por decidir cuáles serán las políticas orientadoras de la denominada "reconstrucción económica y social del país", un debate que se ha pretendido circunscribir al trabajo en una comisión parlamentaria, pero que nosotras seguimos empeñadas en llevar a un terreno de debate y confrontación de ideas más amplio que implique el más extenso debate social posible en coordinación con el incremento de una movilización social que debe ser organizada. Es la única opción que las fuerzas de la izquierda tenemos para alterar a nuestro favor la actual correlación de fuerzas, limitada por una limitada representación parlamentaria de Unidas Podemos.

Para el PCE es estratégico que en el actual contexto político y social se revitalice la capacidad de movilización e intervención política del movimiento obrero organizado, que no puede quedar limitado a su intervención en las mesas de trabajo del diálogo social y las reuniones periódicas en las instituciones. Las movilizaciones impulsadas por los sindicatos exigiendo unas políticas de reconstrucción al servicio de la clase trabajadora, fueron un importante inicio para mostrar la voluntad de movilización en esta "nueva

normalidad", pero pusieron en evidencia la necesidad de organizar, reforzar y multiplicar estas movilizaciones -también por nosotros, en coordinación y complicidad con los sindicatos-, objetivo que es prioritario para el PCE. El PCE debe trabajar para articular y reforzar la vinculación entre los sindicatos y los movimientos sociales, en especial con aquellos movimientos y expresiones de luchas sociales vinculadas al mundo laboral. No podemos perder de vista que muy probablemente la confrontación entorno a la mesa de "diálogo social" entre el gobierno, la patronal y los sindicatos será la tónica cuando se entre a debatir proyectos concretos de derogación de la reforma laboral de los anteriores gobiernos, lo que debemos intentar que dé lugar a movilizaciones sindicales el próximo otoño, que deben ser exitosas para facilitar la puesta en marcha con la mayor rapidez posible de las medidas para dejar sin efecto la reforma laboral. No basta con aprobar medidas programáticas si no tenemos la fuerza suficiente para ponerlas en práctica.

Destacamos también la importancia de preservar la fortaleza y unidad de movimientos sociales que han sido determinantes para hacer avanzar los intereses de la clase obrera y las luchas populares en los últimos años, como ha sido el surgimiento de un amplio movimiento feminista con una destacada visión de clase. Ante los complejos debates que se están produciendo en estos días, el PCE debe mantener una estrategia de preservación de la unidad y máxima cohesión de dicho movimiento, jugando un papel destacado en la construcción de alternativas de clase en los debates, trabajando por reducir la crispación y confrontación y defendiendo la unidad del movimiento feminista en torno a las propuestas acordadas en el XX Congreso del PCE.

Venimos defendiendo desde que empezó el debate sobre la necesaria reconstrucción económica y social de España, que no ha sido estrictamente el COVID lo que ha provocado esta inmensa crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria. El sistema capitalista en el que vivimos, en la actual fase de desregulación y reducción del Estado en aplicación de las políticas ultra neoliberales, es lo que nos ha provocado el grave problema de seguridad humana que ha imposibilitado resistir ante una intensa disminución de la actividad económica de poco más de dos meses de duración. El sistema tenía los pies de barro y no fue capaz de aguantar una crisis grave e imprevista.

Por ello, el debate sobre las bases de la reconstrucción económica y social es estratégico y la confrontación no ha hecho más que empezar.

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados ha aprobado los borradores que cada uno de los cuatro Grupos de Trabajo trabajará como ponencias y, tras el correspondiente trámite de enmiendas, se llevarán al debate en el plenario del Congreso en la segunda quincena de julio.

Tras acabar el primer semestre de la experiencia del cogobierno en nuestro país, la priorización de la gestión de la pandemia y su grave impacto en España y en el mundo ha marcado nuestro trabajo político. Los ambiciosos retos políticos con los que Unidas Podemos entraba en el Gobierno al inicio de la legislatura, se ha convertido en retos urgentes y necesarios de alcanzar con rapidez a medida que evolucionaba la crisis del COVID-19.

Desde el primer momento nuestro objetivo ha sido que en esta nueva crisis el Gobierno de España no le diera la espalda a nuestro pueblo, que no se repitieran los errores que marcaron la gestión de la crisis a partir de 2008, en la que se rescataron a los bancos y dejaron caer a las familias trabajadoras.

En los últimos meses Unidas Podemos, con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas que forman parte de esta convergencia política, hemos impulsado numerosas medidas para levantar el denominado “Escudo Social” para que nadie se quedara atrás en esta crisis. La aprobación de medidas para la protección de los trabajadores evitando los despidos a través de ERTES y la intensificación de las inspecciones de trabajo, el impulso de ayudas directas e indirectas a pequeños y medianos empresarios, autónomos y empleadas de hogar, la prohibición de cortes de suministros básicos, despidos objetivos por el COVID, la suspensión de desahucios o la aprobación del Ingreso Mínimo Vital son solo algunos de los ejemplos de políticas –podemos afirmar con rotundidad- que sin la presencia de Unidas Podemos en este gobierno sin duda que no se habrían aprobado.

Esta crisis también ha puesto a España y, sobre todo, a sus servicios públicos, delante de un espejo. Décadas de privatización y desmantelamiento de los servicios públicos y de transferencia de capital público al sector financiero han tenido consecuencias dramáticas para la población. No podremos evitar la repetición de pandemias globales, pero sí debemos preparar a nuestro país, sus instituciones y su economía, para que no vuelvan a repetirse situaciones como las que hemos vivido. Para eso necesitamos un debate sobre la reconstrucción de nuestro país, que no ha hecho más que empezar.

La convocatoria de una Comisión de Reconstrucción en el Congreso es un primer paso para la consecución del objetivo anterior, pero no puede ni debe ser el único, porque tal y como hemos venido repitiendo en diversos documentos del PCE y de IU no se podía dejar exclusivamente en el ámbito institucional la elaboración del Plan de Reconstrucción que necesita nuestro país.

En esta Comisión Parlamentaria, los borradores de las conclusiones elaboradas con las aportaciones recibidas en el Congreso durante el último mes pasaran ahora al debate parlamentario.

Estos borradores presentados no contienen todas las conclusiones que nos hubiera gustado que figuraran en las ponencias aprobadas para su debate. No se contemplan medidas que en nuestra opinión son necesarias para que la gestión de la crisis actual y de la que viene no se cargue sobre las espaldas de las familias trabajadoras de nuestro país. Hemos defendido públicamente que es necesario implementar medidas audaces en materia industrial, económica y fiscal para, garantizarla creación de riqueza y su justa redistribución, de forma que avancemos en cambiar las bases de nuestro modelo económico.

Hemos insistido en que la activación de la movilización social es imprescindible para alterar a nuestro favor la correlación de fuerzas política que permita que las más importantes de nuestras propuestas para la reconstrucción queden

definitivamente aprobadas entre las conclusiones aceptadas por el gobierno de España. Por ello ya hemos mencionado la importancia a la par que la debilidad constatada en las movilizaciones habidas hasta ahora, lo que nos lleva a priorizar un nuevo impulso a la campaña por la reconstrucción aprobada desde el espacio de Unidas Podemos, donde por ahora se han realizado encuentros con colectivos sociales de sanidad y de cuidados respectivamente y se prepara uno con colectivos del sector productivo primario. Algunas organizaciones del PCE ya han puesto en marcha la campaña a fecha de hoy al igual que algunas organizaciones territoriales de IU. Reiteramos los acuerdos adoptados desde la última reunión del Comité Central y las sucesivas reuniones de Comisión Política de organizar la campaña política y social de movilización en torno a nuestras propuestas sobre la reconstrucción tras la emergencia, para que estas propuestas puedan llegar a ser hegemónicas. No olvidemos que la confrontación seguirá incluso una vez aprobadas las conclusiones de las diversas comisiones de reconstrucción aprobadas en varias instituciones del Estado, ya que el debate y confrontación de modelos políticos y sociales se trasladará a la negociación y aprobación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.

Sabemos que el PCE no tiene que esperar para organizar las campañas y movilizaciones necesarias -especialmente cuando han sido aprobadas en nuestros órganos- a que ninguna de las organizaciones del espacio Unidas Podemos nos contacte o proponga organizar estas actividades. El PCE debe tomar siempre la iniciativa para potenciar y organizar el trabajo conjunto entre las distintas asambleas y organizaciones de base del espacio Unidas Podemos en todo momento y respecto a cualquier actividad política, más aún para impulsar esta campaña.

Somos conscientes de que la disputa sobre la reconstrucción no ha hecho más que empezar y por ello concluimos que necesitamos impulsar un proceso de acción política y social para avanzar hasta conseguir la victoria del bloque democrático -que se articuló en torno a la investidura- sobre el bloque autoritario que solo busca desestabilizar al Gobierno.

En ese momento político, es positivo llegar al más amplio consenso del mayor número posible de fuerzas políticas y sociales de nuestro país en torno a las propuestas defendidas por el Gobierno -en especial sobre los contenidos del acuerdo programático de gobierno-, reduciendo así el ambiente de crispación que han creado la derecha y la extrema derecha. Por ello, debemos seguir reforzando los siguientes ejes de trabajo para los próximos meses:

1.- Para nosotros el pacto programático del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es irrenunciable y sigue vigente en todos sus términos, no quedando sin efecto por un hipotético acuerdo de reconstrucción que no contemple objetivos incluido en el anterior acuerdo programático.

2.- En las conclusiones sobre Reconstrucción deberá constar el fortalecimiento de los servicios públicos, la extensión de los derechos sociales y laborales y la puesta en marcha de una fiscalidad progresiva equiparable al contexto europeo.

3.- El proceso de debate de las próximas semanas en torno a las propuestas para la reconstrucción es fundamental para consolidar el bloque democrático que hizo posible el actual Gobierno de coalición y debe permitir aprobar próximamente unos PG del Estado. En este bloque no tienen cabida las expresiones políticas de la ultraderecha ni las de la derecha y sus aliados. Nuestra tarea ahora es utilizar el debate parlamentario y social sobre las propuestas para la Reconstrucción como alternativa a un posible "pacto de Estado" en el que Partido Popular y Ciudadanos estarían más cómodos.

4.- Es fundamental conjugar el trabajo político con la movilización social y política, ya que solo es posible aumentar el peso político de nuestros 35 diputados con una fuerza sostenida de movilización en la calle, empujando para la consecución de aquellos acuerdos que beneficien a la mayoría de gente trabajadora de nuestro país. Corresponde que desde el espacio de Unidas podemos se trabaje intensamente por incrementar la movilización social y política en torno a la campaña sobre la reconstrucción iniciada hace varias semanas.

5.- Nuestro objetivo es garantizar que el máximo de las siguientes propuestas, que creemos que son imprescindibles para reconstruir el país, se sitúen como prioritarias en la agenda de trabajo gubernamental que surja de la finalización del debate sobre la reconstrucción: recuperar la soberanía productiva y energética para una reindustrialización verde y sostenible; fortalecer el sector público para que nadie se quede atrás en esta crisis; subordinar toda la riqueza del país al interés general; todos los recursos del país al servicio de la reconstrucción; todos los derechos para todas, defender la universalidad de los derechos humanos; un sistema nacional público de cuidados profesionalizado; no a la UE del capital y las oligarquías nacionales.

La investigación abierta por la fiscalía de Suiza por la entrega de 100 millones de dolores del Rey de Arabia Saudí a Juan Carlos I, depositados en el banco Mirabaud con sede en el paraíso fiscal de las Bahamas, pone en evidencia el alcance de la crisis del sistema constitucional de 1978. Previsiblemente, esta "donación" está relacionada con una "comisión" por las obras del AVE a la Meca contratada por 6.300 millones de euros a varias empresas españolas.

Para el PCE es inexcusable que el exjefe del estado sea investigado y procesado atendiendo a que su inviolabilidad como jefe de estado solo alcanzaba a actos oficiales entre los cuales no se encuentran las actividades contrarias a la ley, así como considerando que su actual aforamiento personal no puede suponer inmunidad ni impunidad.

Este escándalo de la monarquía española pone de manifiesto la necesidad de resolver urgentemente la forma de modelo de estado entre monarquía o república mediante consulta popular, recuperando así un procedimiento democrático para la toma de una decisión tan trascendente como es la elección del jefe del estado. Trabajaremos para conseguir las mayorías necesaria para llevar adelante ese proceso

IV.- El brusco parón económico provocado por la pandemia puede desencadenar una crisis capitalista sin precedentes, una crisis que ya estaba larvándose en el ciclo de acumulación desatado una vez superada la crisis de 2008, y casi con los mismos ingredientes: aumento desbocado de la deuda de empresas y estados, especulación financiera e inmobiliaria gracias a la emisión de inmensas cantidades de dinero por los diferentes bancos centrales a tipos bajo o directamente negativos que han ido a mano de la banca. Al pararse la economía productiva, esa gran cantidad de capital especulativo puede desvalorizarse de golpe, al no poder extraerse la plusvalía que finalmente debería respaldarlo.

Además la ingente cantidad de dinero emitida por los bancos centrales ha servido para sostener artificialmente a muchas empresas, que tienen muy difícil hacer frente a sus deudas en la nueva situación. Ya había síntomas de crisis en el sector industrial en los últimos trimestres, por lo que la pandemia no habría hecho más que acelerar y amplificar el proceso.

Pero sin duda, lo más preocupante es la situación de la triada de los sectores turístico, inmobiliario y servicios, con las graves implicaciones que tiene al haber adoptado rasgos de monocultivo. Es en estos sectores donde se ha producido una gran acumulación de capital, concentrando gran parte de la fuerza de trabajo, al calor del masivo aumento del turismo extranjero (de 57 M en 2009 a 83,7 M en 2019), y parece que los planes de la burguesía insisten en ese camino, ya que siguen anunciándose proyectos y nuevas inversiones, cuando se demuestra que es un sector altamente especulativo y sensible a múltiples circunstancias, al estar al final de la cadena de valor. Es decir, si cierran empresas industriales de los países emisores, difícilmente van a volver a hacer turismo o acudirán, en todo caso a otros destinos más baratos del Mediterráneo que compiten con España.

Este panorama hace mas imprescindible abordar el debate sobre las nuevas bases de reconstrucción de España tras la pandemia, debate que ya hemos señalado debe articularse sobre el fortalecimiento de lo público, la generalización de los derechos sociales y su obligatoria garantía de cumplimiento y respeto por las administraciones públicas, la recuperación de la capacidad de dirección de la economía y el fortalecimiento del sector industrial, preferentemente público, que garantice la soberanía económica del Estado.

En los debates de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, aun no concluidos, de momento hemos impedido un acuerdo que rescatara las políticas neoliberales y continuamos trabajando para que las propuestas de defensa de lo público defendidas por la izquierda, los movimientos sociales y los sindicatos de clase, sean hegemónicas.

Hemos conseguido un acuerdo mayoritario sobre la necesidad de que todas las nuevas inversiones y gastos en educación y sanidad tras la pandemia se realicen en el sector público y se gestionen directamente por las administraciones públicas. También hemos conseguido un gran acuerdo para que el dinero hasta ahora bloqueado en los ayuntamientos por la regla de gasto, pueda liberarse y aplicarse a inversiones en servicios sociales.

Continuamos trabajando para alcanzar un acuerdo mayoritario sobre política fiscal que permita una reforma en profundidad de los impuestos sobre los beneficios empresariales, sobre el capital y sobre el patrimonio que permitan elevar la presión fiscal en España sobre estos sectores al menos en los 7 puntos que nos separan de la media europea actualmente.

Nuestro objetivo es mantener el Escudo social aprobado durante el Estado de Alarma mientras que sea necesario y convertir lo que hoy son meras ayudas sociales en derechos permanentes. En el último consejo de ministros hemos conseguido mantener varias de estas medidas al menos unos meses más. Pero somos conscientes de que el escudo social y la generación de nuevos derechos sociales no será posible sin conseguir de inmediato la necesaria financiación hasta que consigamos poner en marcha una reforma fiscal que, si consigue las mayorías parlamentarias necesarias para su aprobación, en ningún caso generara ingresos al menos hasta el mes de abril de 2021.

V.- La estrategia del dialogo social para avanzar en el proceso de dismantelar las reformas laborales.

La negociación y el acuerdo en el ámbito laboral ha sido un instrumento utilizado históricamente por la clase obrera en la tensión dialéctica conflicto-acuerdo. Datan de principio del siglo XX los primeros acuerdos que, tras importantes tensiones sociales, ponían fin a huelgas y conflictos mediante los que se obtenían mejoras salariales, reducciones de jornada u otras condiciones de trabajo. El reconocimiento de la libertad sindical y el papel central de los sindicatos en la representación de las personas trabajadoras, así como la institucionalización de la negociación colectiva como instrumento de redistribución de la riqueza y de incremento de la participación democrática en la empresa y en la sociedad inaugura otras formas de negociación más institucionales: los pactos confederales sindicatos-patronales y los pactos tripartitos (diálogo social) entre Gobierno-Sindicatos-Patronal.

El papel de los sindicatos y el resultado en estos grandes pactos ha tenido que ver con la correlación de fuerzas de cada momento. En los años 80 los pactos que articularon los procesos de reconversión tuvieron un alto coste para los sindicatos de clase, en pleno proceso de reconocimiento y consolidación. Los acuerdos posteriores a la Huelga General de 1988, sin embargo, supusieron una gran victoria para el movimiento obrero -mejora de prestaciones por desempleo- y un reconocimiento de los sindicatos de clase como sujetos político-sociales.

Con la crisis financiera del sistema capitalista de 2008 se inició un proceso inédito de agresión al sindicalismo de clase y su principal medio de tutela de las personas trabajadoras: la negociación colectiva. La reforma laboral del Partido Popular, no solo anuló el propio acuerdo suscrito por CCOO-UGT y CEOE-CEPYME dos meses antes de su llegada al poder, sino que introduce una reaccionaria regulación contraria a la negociación colectiva, anulando operativamente el papel de los sindicatos de clase. En todo caso, no puede, dejar de criticarse la inactividad inicial de los sindicatos frente a las distintas manifestaciones de las políticas de austeridad, cuya defensa se articuló a

través de las distintas mareas -blanca de sanidad, verde de educación, naranja de dependencia, etc.- en las que, no obstante, gran número de militante y cuadros participaron a título individual.

Respecto al papel actual del diálogo social nos encontramos ante importantes retos y también oportunidades. El cambio de gobierno ha incidido en la correlación de fuerzas al menos desde el punto de vista institucional. Desde el punto de vista de la tensión en la calle y de los distintos movimientos sociales, sin embargo, se ha producido una desmovilización, parece que como consecuencia de una especie de convicción de que el Gobierno puede hacerlo todo. Se olvida que, en primer lugar, el Gobierno no es lo mismo que el Poder y, en segundo lugar, que en el Gobierno conviven dos culturas muy diversas que en ocasiones ponen de manifiesto las contradicciones centrales del capitalismo. Ello significa que, si se quiere mejorar la posición de la clase obrera y el resultado del diálogo social, está debe movilizarse y empujar en la dirección transformadora y obrera.

No debe olvidarse que los grandes representantes del sistema capitalista en España (empresas del IBEX, Bancos, incluido del Banco de España, y grupos de interés, mayoría de la prensa, etc.) e internacionales (FMI, Banco Mundial, Unión Europea) están presionando fuertemente para mantener las reglas de disciplina presupuestaria y fiscal de la época de los recortes y la austeridad para evitar otras políticas social y presupuestariamente expansivas.

La activa participación sindical en el diálogo social en este contexto político de gobierno de coalición, ofrece distintas oportunidades:

- a) Fortalecimiento del papel sindical en la defensa de los intereses de las clases trabajadoras: los acuerdos alcanzados hasta el momento (Salario Mínimo Interprofesional, Mejora de las condiciones del trabajo en el campo -Peonadas- y los acuerdos sociales relativos a los ERTES) han reforzado el papel sindical y han permitido incorporar en la agenda política la mejora de las condiciones de trabajo y protección social.
- b) Fortalecimiento de las posiciones más de izquierdas en el Gobierno: el papel sindical puede ser fundamental para inclinar al Gobierno para desarrollar de manera efectiva la parte más social y comprometida del acuerdo de gobierno.
- c) Fortalecimiento del Gobierno en las negociaciones sobre la financiación proveniente de la Unión Europea. En este momento se está decidiendo el modo en que se resuelve la posible crisis de deuda de nuestro país. En el fondo está en juego, tanto el modelo europeo, como el modo en que se gestione la financiación de la deuda española destinada a superar la crisis económica derivada de la pandemia. En definitiva, se decide quién va a pagar la crisis.

En este contexto es fundamental el papel sindical, demostrando su responsabilidad, pero también su firmeza, en el apoyo al Gobierno de la nación en la propuesta de menos créditos y más ayudas y también menos condicionalidad.

En el contexto de la crisis sanitaria y económica posterior, no podemos olvidar que existe una importante y profunda agenda social pendiente para revertir

las reformas laborales regresivas de los últimos años para cuyo desarrollo se debe exigir un importante esfuerzo a los sindicatos de clase. Tampoco se debe olvidar que el desarrollo de tales medidas y la consecución de cada vez más conquistas por parte de las clases trabajadoras requieren de la concienciación y la movilización constante.

En esa clave ha de entenderse el acuerdo alcanzado entre sindicatos, patronal y gobierno el pasado 3 de julio, que apuesta por evitar los despidos de trabajadores. Empresarios, sindicatos y Gobierno coinciden en la necesidad de situar la creación de empleo de calidad en el centro de la recuperación, y así impediremos que el despido sea el principal mecanismo de ajuste en estos momentos con el cual las empresas pretendan enjuagar sus pérdidas.

Por ello, para recuperar el empleo el acuerdo establece que las empresas deben comprometerse a la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la crisis COVID, y a potenciar la contratación indefinida. No perdemos de vista en todo caso que de momento, sin acordar la contrarreforma laboral, apenas se trata de declaraciones de intenciones.

El acuerdo, también de manera genérica, contempla reformas laborales para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras y la creación de un marco legal para el teletrabajo y la adaptabilidad de la jornada laboral para aumentar la productividad de las empresas y mejorar la situación de los trabajadores y la conciliación familiar. Se introduce el compromiso de impulsar la economía verde para la transición industrial ecológica, así como fomentar la digitalización de la economía, su reindustrialización y el desarrollo de sectores estratégicos.

Se añaden compromisos con el reforzamiento de los Servicios Públicos, especialmente la sanidad y dependencia y la necesidad de garantizar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones de manera que se proteja el poder adquisitivo, así como medidas para aflorar la economía sumergida, mediante la lucha contra el fraude, la precariedad y la evasión fiscal.

Somos conscientes de que para que estos acuerdos -tanto los de los distintos procesos de reconstrucción estatal, autonómicos y locales, como los acuerdos de diálogo social- no se queden en nada, es necesario poner en marcha los procesos de concreción legislativa y lo que es más importante, es imprescindible organizar un amplio apoyo popular a las medidas que constituyen nuestros objetivos, puesto que en caso contrario, podrían no llevarse a delante por falta de fuerza para imponerlas.

Tanto lo referido a la contrarreforma laboral, como el resto de propuestas del acuerdo programático de gobierno, no se consiguen ni imponen sin cambiar la actual correlación de fuerzas institucional a través de la movilización

VI.- Cuando las cosas vienen mal dadas, la gente sabe que se puede fiar de nosotros, de Unidas Podemos, el espacio político amplio al que pertenecemos en toda España y a través del cual hemos conseguido estar en el gobierno en

el momento de la más grave crisis social y económica vivida desde la posguerra, evidenciándose gracias a ello las evidentes diferencias entre la gestión de esta crisis -atendiendo a las necesidades populares- y la del año 2011.

En la actual coyuntura política, es trascendental que el PCE, IU y todo el espacio de Unidas Podemos pueda rentabilizar los avances sociales y laborales que este gobierno vaya realizando, en especial en comparación con las medidas adoptadas por el gobierno socialista primero y el gobierno del Partido Popular después, en la crisis del 2008 y años sucesivos.

Sorprendentemente, no siempre esto es así y en muchas ocasiones las conquistas, éxitos y avances que hemos impulsado se atribuyen al PSOE.

Otras veces no hay conquistas que celebrar y en esos casos también es necesario que sepamos hacer ver nuestras derrotas y mostrar que evitarlas dependerá del apoyo popular que obtengan nuestras propuestas, sin ocultar que las derrotas tienen costes, tanto respecto al desarrollo de políticas con efectos sociales perniciosos como por el posible aislamiento político, ideológico e institucional que pueden suponer.

Pero mostrar nuestras limitaciones sin ocultamientos también permite el reforzamiento de nuestro perfil autónomo y diferenciado del PSOE. Cada derrota parcial debe ser explicada y desde ella tenemos que ser capaces de lanzar nuevas propuestas políticas de forma constructiva.

Hasta conseguir la aprobación del Ingreso Mínimo Vital hemos tenido que sufrir distintas derrotas parciales, que han retrasado la aprobación de este derecho y en parte lo han limitado respecto a nuestra propuesta inicial. No habríamos conseguido alcanzar nuestros objetivos sin dar la batalla cultural en el terreno de las ideas en la sociedad hasta conseguir un apoyo superior al 80% de las personas que viven en España.

De esta forma somos conscientes de que para poner en marcha todas las medidas incluidas en el acuerdo de gobierno de coalición será necesario en muchos casos confrontar internamente hasta conseguir la puesta en marcha de la medida, como por ejemplo estamos haciendo estos días respecto a la propuesta del Impuesto a las grandes fortunas para financiar el escudo social. Seamos conscientes de esta situación y entremos inteligentemente en la pelea cuando sea necesario, siempre con un discurso en positivo de conquista de nuevas medidas de protección a nuestro pueblo, sin que cunda la decepción y sin debilitarnos, no ya el Gobierno de coalición, sino al propio "espacio progresista".

Para continuar desarrollando este trabajo es necesario que el Partido, sus organizaciones, su militancia, sea capaz de estar a la altura del momento político, siendo capaces de ser un Partido de movilización, de propuesta y de influencia en la aplicación de medidas de gobierno para conseguir el mejor resultado para la clase obrera, las capas populares y el futuro del país.

VII.- Finalizadas las campañas electorales de las Elecciones Autonómicas en Euskadi y Galicia, felicitamos a los y las camaradas y compañeras de nuestro espacio político que han trabajado para que nuestras candidaturas obtengan los mejores resultados posibles en las citas electorales y mostramos una vez más nuestro apoyo a las candidaturas del espacio Unidas Podemos en estos territorios. El resultado de estos procesos electorales autonómicos será debidamente analizado una vez conozcamos los resultados,

Madrid, 11 de julio de 2020